

La libertad avanza para los fondos

El Gobierno anunció modificaciones de normativas en beneficio de los Fondos Comunes de Inversión.

Locos de remate

El JP Morgan gana posiciones en el gobierno abriendo el juego a las inversiones privadas con la venta de empresas.

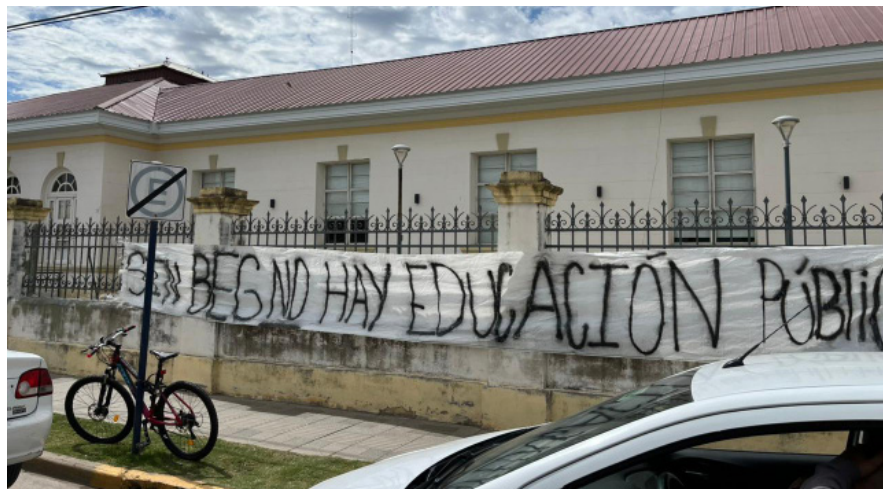
tribuna

Edición 166 | 17 de noviembre de 2025 | Villa María - Córdoba | Periódico quincenal

6
AÑOS

LOCAL - Presentaron un documento al Centro Cívico con más de 500 firmas.

Banderazo por el Boleto Educativo



EDUCACIÓN. Se estima que el gasto mensual de un estudiante que viaja diariamente desde localidades cercanas puede alcanzar los \$600.000.

Estudiantes reclamaron frente al Centro Cívico por la extensión del boleto de febrero a diciembre. La acción se replicó en Córdoba y Río Cuarto.

Estudiantes de la Universidad Nacional de Villa María (UNVM) realizaron un banderazo el jueves 6 de noviembre frente al Centro Cívico para exigir la extensión del Boleto Educativo Cordobés (BEC) durante el período de mesas de exámenes finales y para los ingresantes del cursillo de ingreso.

La medida fue resuelta durante una asamblea que tuvo lugar el día anterior en el campus universitario, donde los estudiantes manifestaron su preocupación por las limitaciones del beneficio.

“La política es muy clara: nosotros comemos más caro, viajamos más caro, estudiamos más caro, trabajamos cada vez más y vivimos cada vez peor, mientras que otros sectores hacen ganancia con nuestra fuerza de trabajo y de

lo que producimos”, sentenciaron desde la asamblea.

La política del BEC fue implementada en la provincia desde el año 2012, se efectiviza cada año a fines de marzo y se suspende a principios de diciembre, por lo que su discontinuidad se da en los meses de febrero y diciembre, fechas en las que los estudiantes siguen asistiendo a las instituciones.

Una de las estudiantes presentes en el banderazo, Agustina Boiero, comentó que además todos los años afrontan dificultades que impiden el acceso al beneficio.

“Estamos hasta 2 o 3 meses sin boleto porque siempre hay muchas idas y vueltas entre las burocracias de la universidad y la provincia en cuanto al acceso de datos de cada estudiante”, comentó.

Además agregó que este año

también hubo recortes en el boleto urbano que funciona dentro de la ciudad, “del año pasado a este, el boleto urbano también fue recortado; pasamos de tenerlo todos los días de la semana a sólo los días que cursamos. Ser estudiante va más allá de los días de cursado, tenemos que poder venir cuando lo necesitemos”.

En el marco del reclamo, las estudiantes presentaron un documento a la institución provincial dirigida a la Secretaria de Transporte que expresa el objetivo de que se “garantice el derecho estudiantil que representa el BEC, para que el mismo se extienda desde el 1° de febrero hasta el 31 de diciembre de cada año, incluyendo cursillos de ingreso, mesas de examen y actividades académicas complementarias”.

En el documento también se plantea que el gasto mensual de un estudiante que viaja diariamente desde localidades cercanas es de hasta \$600.000. El mismo fue presentado con el acompañamiento de más de 500 firmas de estudiantes de la UNVM.

Reclamo provincial

La convocatoria fue articulada con estudiantes de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y de la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC), que realizaron protestas de forma simultánea en las dependencias provinciales de cada ciudad.

En Córdoba los estudiantes realizaron una pegatina en Ciudad Universitaria y en el centro de la Ciudad y se movilizaron a la secretaría de Transporte, donde realizaron la presentación centralizada de las notas y las firmas de las tres universidades.

Reclamo de los UBER

Trabajadores de la app exigieron a las autoridades locales por el “derecho al trabajo”

Trabajadores de Uber se reunieron el pasado viernes en el Concejo Deliberante para denunciar la “cacería” que estuvieron viviendo en la ciudad luego de la sanción de la nueva normativa que regula las condiciones de las aplicaciones en la ciudad.

Se trata de la Ordenanza 8.232 que impone cupos, tarifas, requisitos de seguridad e identificación para las empresas digitales de transporte y sus conductores. Sin embargo los trabajadores denunciaron que al momento de inscribirse no pudieron hacerlo ya que UBER no se encuentra registrado en la ciudad.

Además, denunciaron que no fueron notificados de la ordenanza, que solo fue publicada en el boletín pero no difundida por lo que la medida los tomó por sorpresa. “Nos enteramos cuando empezaron a perseguirnos y levantar autos”.

“Nos sentimos afectados como ciudadanos, que nos salgan a cazar, secuestrando autos, que nos persigan, como si fuésemos delincuentes, todo fue muy invasivo”. “Pedimos que nos dejen trabajar, que nos sean claros sobre lo que nos exigen, porque no hubo claridad” concluyeron.

Como resultado del encuentro, el concejal Manuel Sosa planteó la presentación de un proyecto para postergar la aplicación de la normativa. Finalmente optaron por abrir mesas de diálogo entre el municipio y los choferes y concretaron una reunión para la próxima semana.

EDITORIAL

Las reformas como carnada

Las últimas semanas fuimos testigos de la lucha de los pesados actores de las finanzas por condicionar el regreso a los mercados de capitales para “invertir”. La “industria” a la que apuntan no es otra que el esquema de valorización de la deuda.

“La única medida sostenible es permitir que la moneda se mueva hasta un nivel que frene la dolarización, incentive la repatriación y permita que los mercados de capitales y los mercados privados funcionen”, ratificó recientemente PIMCO, uno de los fondos más grandes con presencia en Argentina.

En paralelo al lanzamiento de las reformas, el esquema de ocupación del Estado se efectiviza a través de diferentes mecanismos. Así, dividen las fuerzas de la protesta social detrás de señuelos parlamentarios para continuar su lucha por la apropiación de los recursos.

También sabemos que este no es sólo un fenómeno nacional o regional. En todo el mundo promueven la austeridad fiscal, reformas de pensiones y laborales, y ajuste a programas sociales.

Lo estructural de esta disputa salta a la vista: licitaciones para la venta y concesión de empresas de transporte y energía, acuerdos para la exportación de tecnología y minerales, y regulaciones para asentar el negocio de los Fondos Comunes de Inversión en el país.

Abajo, la sociedad aparece desgastada. Años de burocratización de las luchas y erosión democrática derivaron en la vacilación de las dirigencias y el desinterés del movimiento. Solo se convoca a discutir nombres, no estructuras ni políticas.

Esa es la verdadera carnada: hablar solo de “reforma laboral” sin mirar el programa integral en marcha desde la dictadura hasta la actualidad.

FINANZAS - Facilitan condiciones para los Fondos Comunes de Inversión

La libertad avanza para los fondos financieros

El Gobierno anunció modificaciones de normativas en beneficio de los Fondos Comunes de Inversión. Sin embargo, estos le responden exigiendo la flotación del peso.



PIMCO. El 3,2% de la cartera de bonos de mercados emergentes de este fondo está invertido en emisiones soberanas de Argentina.

La Comisión Nacional de Valores (CNV), organismo público que regula el mercado financiero en el país, puso en marcha una reforma normativa que simplifica las regulaciones a los Fondos Comunes de Inversión (FCI), con el objetivo de agilizar procesos y reducir cargas administrativas a los actores del mercado de capitales.

La medida fue oficializada mediante la Resolución General 1089/2025, publicada el 31 de octubre en el Boletín Oficial y vigente desde el 1 de noviembre. La reforma alcanza tanto a los FCI, así como a los agentes que intervienen en su operatoria.

La nueva normativa reestructura integralmente el régimen de los FCI acelerando procedimientos como la autorización inicial de nuevos fondos, la aprobación de políticas de inversión específicas y la sustitución

de órganos de administración y custodia.

La CNV destacó que estos cambios buscan adaptar el marco regulatorio argentino a estándares internacionales de “transparencia” y “protección al inversor”.

El presidente de la CNV, Roberto Silva, presentó estas medidas el miércoles pasado durante la apertura del Simposio de Mercado de Capitales y Finanzas Corporativas del Instituto Argentino de Ejecutivos en Finanzas (IAEF).

Allí recordó que, desde 2024, el organismo se propuso normalizar y desarrollar el mercado de capitales en coordinación con el Ministerio de Economía y el Banco Central.

“Hemos cumplido varios de estos objetivos sancionando las 100 primeras regulaciones de esta gestión, que representan un salto histórico hacia la modernización, desregulación y simplificación del mercado”, afirmó Silva.

También destacó que normativas recientes —como las de tokenización y PSAVs (“Proveedor de Servicios de Activos Virtuales”)— posicionaron a la Argentina “a la vanguardia de la región y del mundo”.

El día anterior, durante su paso por el foro organizado por la Cámara Argentina Fintech, Silva también resaltó las regulaciones que representan “un salto hacia la modernidad y la desregulación en el mercado de capitales, con el objetivo de impulsar su desarrollo”.

Sin embargo, los fondos demandan la liberación del esquema cambiario.

“Recomiendo dejar flotar el peso si quieren romper el ciclo de auge y caída. Los inversores extranjeros no invertiremos en activos locales a estos niveles de tipo de cambio. Punto final”, sentenció en declaraciones a la prensa Pramol Dhawan, director de gestión de cartera de mercados emergentes de Pimco, uno de los fondos de inversión más grandes del mundo.

Estas declaraciones se dieron en el marco previo a un encuentro que el presidente Javier Milei sostuvo con inversores internacionales en el Council of the Americas, en Nueva York, en su última visita al país norteamericano.

“Si alguien realmente cree que se puede flotar libremente en un mercado que opera 90, 100, 200 millones por día, me parece que no operaron nunca un mercado. No pidamos cosas que no se pueden hacer”, respondió el ministro Caputo, el pasado viernes en la 31ª Conferencia organizada por la Unión Industrial Argentina (UIA).

ANÁLISIS - Se fortalece el programa económico de la dependencia.

Locos de remate

Luego del resultado triunfal de las elecciones, el bloque comandado por el JP Morgan fortaleció sus posiciones en el país reubicando y colocando a más funcionarios dentro del Gobierno Nacional.

Sumado a los designados anteriormente, asumió como secretario de Finanzas Alejandro Lew, quien trabajó durante más de una década en la sede de la entidad en Nueva York enfocado en mercados emergentes.

A la cabeza del equipo se encuentra Luis Caputo, Ministro de Economía, un reconocido funcionario del banco, quien se encuentra acompañado por José Luis Daza como secretario de Política Económica, exdirector gerente y jefe de investigación de mercados emergentes en Nueva York.

El Banco Central (BCRA) también está tomado: Santiago Bausili, su actual presidente, fue director para Latinoamérica del JP Morgan, mientras que Vladimir Werning, su vicepresidente, llegó a ser director ejecutivo y economista jefe para la región. Sumado a otros cuantos miembros del directorio también provenientes de la misma entidad.

Programa

De esta manera se acentúa su programa económico que tiene el objetivo de garantizar las jugosas tasas de interés en el sistema financiero local. Para ello, debe acompañarlo de una política de ajuste fiscal e incremento de la deuda pública, fortaleciendo en paralelo el esquema de reprimerización de la economía.

En el análisis de la edición anterior describimos la lucha de este bloque financiero por el control de las variables económicas y los grupos subordinados, aunque las medidas implementadas a tal fin no son suficientes hasta el momento.

Al préstamo y apoyo político de EE.UU. previo a las elecciones se suma un nuevo acuerdo comercial realizado la semana pasada luego de varias instancias de negociación que busca acentuar la apertura de los mercados a través de compromisos arancelarios concernientes a lo tecnológico, ambiental y laboral, entre otros.

Por su parte, Alejandro Díaz,



ENTREGA. Iniciaron las licitaciones para la venta y concesión de empresas de transporte y energía.

El JP Morgan gana posiciones en el gobierno abriendo el juego a las inversiones privadas con la venta de empresas públicas, mientras busca acordar con otros actores cambios en la legislación laboral y fiscal.

CEO de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina (AmCham), en una conferencia la semana pasada, había adelantado las medidas que las principales empresas estadounidenses consideran prioritarias para destrabar inversiones.

Entre ellos se encuentra el condicionamiento al presupuesto nacional que comenzó a debatirse inmediatamente después de concluidas las elecciones. A su vez, presionan por la reforma laboral y tributaria, la ley de glaciares, la modificación de la inocencia fiscal y una reforma al Código Penal.

Las reformas, con recaudo

Dichas reformas apuntan a desviar el impacto negativo del ajuste en el sector comercial e industrial, sin afectar el negocio financiero en el país. Por ello, otros actores adhieren al pedido laboral y fiscal en sintonía con lo

planteado por AmCham, aunque con matices ya que también se ven perjudicados por la baja de la actividad económica y el consumo.

El mismo CEO del Grupo Techint, Paolo Rocca, en la 31° Conferencia de la Unión Industrial Argentina (UIA), sostuvo que el país “necesita de una fuerte estructura industrial” y no sólo desarrollar los sectores exportadores como el agro y la minería.

De esta manera, reculando ante el programa económico del gobierno, el empresario aclaró que “el concepto de política industrial se ha desprestigiado en los últimos años por los abusos, pero eso no le quita valor y relevancia”.

El nuevo ministro del Interior, Diego Santilli, en un intento por ganarse las voluntades del sector, aclaró en ese mismo encuentro que la reforma laboral tiene el objetivo de que “puedan contratar más gente sin sufrir la industria de los juicios laborales, que encarece los

costos y no les da previsibilidad”.

Dicho funcionario es quien está encargado de reunirse con los gobernadores para lograr los consensos necesarios y llevar una propuesta al Congreso antes de finalizar el año, aunque aún no se conocen detalles del proyecto. Luego de la cumbre post elecciones, la semana pasada comenzaron las reuniones bilaterales, donde ya se predispusieron a negociar los mandatarios de Córdoba, San Juan, Salta y Tucumán.

Así el programa económico entiende a las reformas como un complemento para acrecentar su influencia sobreponiéndose a la resistencia de la oposición política y manteniendo al margen la protesta social.

Remate y tensiones en el sistema productivo

Aún con el ajuste, sumado a la recaudación de las retenciones y el préstamo de EE.UU., al parecer no alcanza para conseguir los recursos necesarios. Julie Kozack, la vocera del FMI, en una conferencia de prensa la semana pasada, enfatizó “la necesidad de acelerar la acumulación de reservas” para “fortalecer aún más la confianza del mercado”.

En la encrucijada, el gobierno acelera la marcha para la venta de empresas públicas y apertura de concesiones en la carrera por cumplir sus metas fiscales. En ese sentido, Caputo anunció la licitación de dos nuevos tramos de 1.800 kilómetros de rutas nacionales para el sector privado.

El sector energético tampoco queda exento: Caputo firmó una resolución que da inicio al proceso de venta del 44% de las acciones de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA). El titular de la empresa, Demian Reidel, reconoció que el interés sería en gran parte por “la exportación de uranio y combustibles nucleares a Estados Unidos”.

Además, el ministro también lanzó la licitación durante 30 años de las cuatro represas hidroeléctricas ubicadas en los ríos Limay y Neuquén. Según la comunicación oficial el Gobierno avanza “en la transformación del sector energético, retirando al Estado del rol de operador para dejar que el capital privado lidere las inversiones”.

Julie Kozack, la vocera del FMI, enfatizó “la *necesidad de acelerar la acumulación de reservas*” para “fortalecer aún más la confianza del mercado”.

MOVIMIENTO

Reestructuración empresaria y trabajadores despedidos

Casos testigos en diferentes partes del país muestran una reestructuración a nivel empresarial que deja como saldo despidos y cesantías.



CRISIS. Las prioridades en las industrias dejan en último lugar a los trabajadores.

La semana pasada en el sector de alimentación, se conoció el quiebre de la empresa láctea La Suipachense.

El juzgado Civil y Comercial N°7 de Mercedes decretó la quiebra de la firma con más de 70 años en el mercado. Esta decisión afecta directamente a 140 trabajadores de la planta industrial ubicada en la localidad bonaerense de Suipacha.

También se sumó el cierre de Alimentos Refrigerados Sociedad Anónima (ARSA), empresa

proveedora de productos de la marca SanCor que fue declarada en quiebra el pasado 6 de noviembre.

La principal planta operaba en el partido bonaerense de Lincoln y empleaba 180 personas, mientras que otras 200 trabajaban en Monte Cristo, Córdoba.

La Suipachense y ARSA son controladas por el grupo venezolano Maralac. Este grupo se quedó con la participación de Vicentin que era controlante de ARSA luego de declararse en

quiebra en 2019.

Por su parte, trabajadores del Frigorífico Euro, ubicado en Villa Gobernador Gálvez, al sur de Santa Fe, decidieron ocupar la planta.

El hecho se dio luego de que la empresa incumpliera el reciente compromiso de pago de salarios adeudados. Ante ellos 160 operarios del sector de tripas para embutidos decidieron que sostendrán la ocupación hasta conseguir los sueldos pertinentes.

"Este conflicto arrancó en enero con 60 despidos que fueron comunicados por WhatsApp. En ese entonces intervino el Ministerio de Trabajo y dictó conciliación obligatoria y los compañeros fueron reincorporados al plantel. Desde ese momento venimos en lucha por el atraso en el pago de sueldo", remarcó a medios locales el delegado Walter Navarro.

Si bien "las ventas bajaron un poco por la situación del país, eso no es todo el problema. Esta gente (los dueños) no son del rubro y no conocen este tema. Son financistas, dueños de una empresa llamada LTF que está en Buenos Aires", amplió sobre los motivos.

Otro de los sectores más

golpeados por las aperturas de importaciones fueron las ramas textiles.

En Tierra del Fuego se conoció el cierre de la fábrica Blanconieve que despidió a 35 trabajadores. La misma se dedicaba a la elaboración de ropa de cama.

"Encontramos la puerta cerrada. De un día para otro nos quedamos sin trabajo. Lo único que pedimos es que nos paguen la indemnización al 100%. No queremos limosnas", contó Marcela, trabajadora despedida a Crónica TV.

También la reconocida firma de sweater Mauro Sergio, radicada en Mar del Plata, suspendió el pasado jueves a 175 trabajadores hasta otoño acusando el derrumbe de ventas.

Previamente se realizó audiencia con el Ministerio de Trabajo decidiendo que los trabajadores recibirán el 78% del salario sin aportes jubilatorios.

"Cuando estábamos esperando la baja de impuestos, nos despachamos con que el Gobierno le bajó el impuesto a los chinos", expresó el titular de la Cámara Textil de Mar del Plata, Guillermo Fasano.

¿Cómo llegan los hogares a fin de mes?*

Uso de ahorros

2003: 19,9%

2025: 37,4%

Prestamos a bancos o entidades financieras

2003: 3,4%

2025: 14,2%

Compra en cuotas o al fiado con tarjeta de crédito

2003: 22%

2025: 50,9%

*Fuente: Indec, Dossier Estadístico: ¿Cómo organizan su economía los hogares argentinos? (Noviembre, 2025)

GOBIERNO

Tras la deuda, el pacto

Luego del swap para las elecciones, el gobierno estadounidense anunció un acuerdo comercial con Argentina, en el marco de una reunión que sostuvieron en Washington el canciller Pablo Quirno y el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio.



AVANCE REGIONAL. EE.UU. anunció acuerdos comerciales con Ecuador, El Salvador y Guatemala.

El pacto abarcaría aspectos como aranceles, eliminación de barreras no arancelarias, propiedad intelectual, minerales críticos, acceso a los mercados agrícolas y regulaciones para bienes tecnológicos, entre otros puntos.

En un comunicado, la Casa Blanca explicó que el entendimiento le otorgará al país un “acceso preferencial” a los mercados de exportación

de “medicamentos, productos químicos, maquinaria, productos de tecnologías de la información, dispositivos médicos, vehículos automotores y una amplia gama de productos agrícolas”.

Estados Unidos, por su parte, se compromete a eliminar los aranceles recíprocos sobre “ciertos recursos naturales no disponibles y artículos no patentados para uso en aplicaciones farmacéuticas”. El beneficio no incluye la quita

para el aluminio ni el acero.

La comunicación también establece que Argentina facilitará el ingreso de ganado vacuno en pie, aves de corral, productos lácteos y porcinos. A su vez, ambos países se comprometieron a cooperar para facilitar la “inversión y el comercio de minerales críticos” y “estabilizar el comercio mundial de soja”.

Los detalles se “trabajarán con celeridad para finalizar el texto del acuerdo para su firma y llevar a cabo los trámites internos correspondientes antes de su entrada en vigor”, cierra el comunicado.

En lo que calificó como un “privilegio y un honor”, el canciller Quirno aseguró en redes sociales que el acuerdo “crea las condiciones para aumentar las inversiones de Estados Unidos en la Argentina e incluye reducción de tarifas para industrias claves aumentando el comercio bilateral entre ambos países”.

Por el momento, los sectores afectados eligieron ser cautos.

La Sociedad Rural, en un comunicado, expresó su apoyo a la iniciativa e informó que aguarda por los detalles finales “para determinar qué impacto tendrá el mismo en la cadena agroindustrial”.

Por su parte, las empresas estadounidenses que integran la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina (AmCham) celebraron el anuncio al remarcar que “en un contexto global cada vez más fragmentado, competitivo e incierto, este paso demuestra que nuestro país tiene las condiciones necesarias para volver a ocupar un rol protagonista en el comercio internacional”.

Estados Unidos es el tercer socio comercial más importante para Argentina. Según Analytica, entre 2014 y 2023, el saldo negativo del país con EE.UU. promedió 3.666 millones de dólares anuales. Sin embargo, en 2024, se alcanzó un superávit de 228 millones de dólares, el primero desde 2005, tras una importante caída de las importaciones.

Deuda con deuda se paga

El Gobierno sostiene sus compromisos financieros con el soporte de Estados Unidos. El Tesoro estadounidense asegura haberse beneficiado con las operaciones, presentando el apoyo como una “inversión”.



COMPROMISOS. Caputo asegura que no se necesita acumular reservas para el cumplimiento de los pagos.

El Banco Central realizó un nuevo pago al Fondo Monetario Internacional (FMI) por unos 825 millones de dólares

en concepto de intereses de deuda.

Según datos publicados por el organismo, en octubre Estados Unidos transfirió más de USD 845

millones en Derechos Especiales de Giro (DEGs) desde sus reservas, cifra que la Argentina sumó antes de ejecutar el pago.

Días después, Scott Bessent, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, confirmó en una entrevista televisiva que el Banco Central (BCRA) activó un primer tramo del swap de monedas por US\$20.000 millones y dijo que su administración ya obtuvo “una ganancia” de la operación.

La semana pasada, el presidente Javier Milei ratificó en una entrevista su compromiso con los pagos de la deuda. “Nosotros vamos a cumplir con nuestras obligaciones. Lo vamos a defender a rajatabla como lo hemos hecho antes”, sostuvo y añadió que desde

el inicio de su administración “la deuda en Argentina bajó en 50 mil millones de dólares”.

Según datos de la Secretaría de Finanzas tomados por Horacio Rovelli, la deuda bruta de la administración pública pasó de 370.674 millones de dólares en diciembre de 2023 a 454.031 millones en septiembre (antes del swap) de este año.

Con respecto a los próximos vencimientos, el ministro Caputo aseguró el pasado jueves que gracias a EE.UU. el país ya no necesita acumular reservas monetarias para hacer frente a sus vencimientos de deuda de 2026.

“Hoy por hoy la acumulación de reservas está separada del pago de deudas”, aseguró ante la UIA.

LATINOAMÉRICA

El imperio ataca

La tensión militar en Latinoamérica continúa ascendiendo con los movimientos de tropas norteamericanas en las costas del Caribe. Además, otros líderes toman partidas y vuelven a alinearse.



MILITARIZACIÓN. Estados Unidos concentró el 20% de sus tropas en la región.

La semana pasada, las fuerzas armadas decidieron apostar en las costas del Caribe al portaaviones más grande de su flota: el USS Gerald R. Ford.

A esto se suma que el día jueves el gobierno norteamericano lanzó la “Operación Lanza del Sur”. Esta misión es encabezada por el Comando Sur (SOUTHCOM) y la Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur

(SOUTHERN SPEAR).

La misión tiene como propósito “expulsar a los narcoterroristas de nuestro hemisferio”, además, el “hemisferio occidental es la vecindad de Estados Unidos, y la protegeremos”, aseguró el secretario de Defensa de EEUU, Pete Hegseth, a través de su cuenta en la red social X.

Así, el despliegue militar anunciado con propósitos de

combatir al narcoterrorismo acontece en paralelo a la guerra que le han declarado al gobierno bolivariano.

Según explicó el analista Serbin Pont en Infobae, actualmente “el 20% de la capacidad combativa de la Armada de Estados Unidos está en el Caribe. Esto no ocurre por rutina. El mensaje hacia la región —y en especial hacia el régimen venezolano— es clarísimo: estamos listos para ejercer presión militar real si así se decide desde la Casa Blanca”.

Por otra parte, esa misma semana se realizó en la ciudad de Santa Marta, Colombia, la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y la Unión Europea (UE).

En ese marco, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro envió una carta a la organización refiriéndose a la militarización de la región.

“Se están desplegando en el Caribe formaciones navales y aéreas que incluyen portaaviones de última generación, destructores misilísticos y

submarinos nucleares”, comentó Maduro.

Ante ello, “proclamamos la defensa incondicional de nuestra América como Zona de Paz, rechazamos de manera categórica cualquier militarización del Caribe” y exhortó a la comunidad para establecer “mecanismos regionales de cooperación humanitaria y defensa colectiva”.

Mientras tanto, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, el pasado 11 de noviembre ordenó a los órganos de inteligencia colombianos suspender el intercambio de información con agencias de seguridad de Estados Unidos.

En un mensaje difundido por redes sociales, Petro aseguró que “tal medida se mantendrá mientras se mantenga el ataque con misiles [de EE.UU.] a lanchas en el Caribe”.

“La lucha contra las drogas debe subordinarse a los derechos humanos del pueblo caribeño”, agregó el mandatario colombiano.

Alineamientos regionales

La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, visitó la semana pasada Ecuador. Allí, mantuvo un encuentro con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, para precisar detalles por la instalación de dos bases militares.

Ante ello, el gobierno ecuatoriano convocó a un plebiscito el pasado domingo ya que la prohibición de bases militares está considerada en la última reforma constitucional que impulsó en el año 2008 el ex presidente Rafael Correa.

Según detalló Noboa sobre los motivos de las mismas: “Queremos atacar con todas las fuerzas a los grupos criminales (...) Trabajar en conjunto en dos

bases donde nuestro personal pueda intervenir en el manejo de información que es lo que necesitamos”.

Por su parte, el recientemente electo presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, visitó Estados Unidos y allí anunció junto al subsecretario de Estado, Christopher Landau, el restablecimiento de las relaciones diplomáticas, quebradas desde 2008.

Esta visita se materializó en una de las primeras políticas aplicadas tras la gira: el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, aseguró que ahora Bolivia contará con oficinas de la DEA y de la embajada yankee en el país.



Los presidentes de Ecuador y Bolivia refuerzan el posicionamiento de Estados Unidos en la región.

INTERNACIONAL

La interna norteamericana

Una feroz disputa acontece en el interior de Estados Unidos entre fuerzas económicas y políticas por tomar control del Estado.



AUSTERIDAD. La aprobación del presupuesto de Trump se extiende hasta enero de 2026.

Muestra de ello ha sido el reciente bloqueo del Gobierno federal, también conocido como “government shutdown”, iniciado el pasado 1 de octubre que se prolongó por más de 40 días.

Aconteció luego que demócratas y republicanos no acordaran en el Senado la aprobación del proyecto de gastos de funcionamiento del gobierno.

El cierre

El desacuerdo se produjo en relación a la política de austeridad fiscal que promueve el oficialismo,

mientras que los demócratas pretendieron extender gastos a programas de seguro médico para poblaciones vulnerables (conocido como Obamacare).

Como consecuencia, esto obligó a la suspensión de operaciones económicas hasta llegar a un acuerdo, por lo que diversos organismos federales que dependen del financiamiento se vieron paralizados, como servicios de asistencia alimentaria, salarios de empleados estatales y el sistema de control de tráfico aéreo.

Finalmente, el pasado 12 de

noviembre el Senado aprobó un proyecto para financiar al Gobierno hasta el 30 de enero de 2026, acuerdo que fue sellado con la firma de Donald Trump, poniendo fin al shutdown.

Este episodio no fue solo una pelea por los costes presupuestarios, sino que se interpreta en el marco de una batalla interna entre corporaciones financieras, intereses industriales y fracciones partidarias por tomar al Estado a su favor.

Lobbistas

La asunción del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani el pasado 4 de noviembre aparece como un elemento central de esa disputa de fondo.

Así el joven candidato de 33 años, se consagra como el primer musulmán en ocupar un cargo político en la ciudad de Wall Street y el más joven en la historia del distrito. Se identifica en el ala más de “izquierda” perteneciendo a Demócratas Socialistas de América (DSA), y apoyó públicamente la causa Palestina.

En su campaña el candidato hizo fuerte énfasis en la lucha contra los “superricos”, además de

prometer congelamiento del costo del alquiler, construir vivienda, eliminar tarifas de autobuses, sistemas universales de guarderías y aumentos salariales.

Durante el discurso de cierre de campaña, expresó: “Los oligarcas de Nueva York son las personas más ricas de la ciudad, del país, de la historia del mundo. No quieren que cambie la ecuación. Harán todo lo posible para evitar que su control se debilite”.

Uno de los primeros en saludar la victoria de Mamdani fue Alexander Soros, hijo del filántropo y líder de fondos de inversión, George Soros.

Según una investigación de Fox, Mamdani habría recibido financiamiento de campaña por parte de las ONG MPower Change y Emgage Action, ambas con financiación cercana a los 2,5 millones de dólares de la fundación de George Soros, Open Society.

Este escenario describe cómo algunos actores del capital financiero progresista canalizan su poder político a través alianzas partidarias emergentes generando elecciones como la de Mamdani que “rompen” con los anteriores candidatos “moderados”.

Marco de reformas en Europa

En Francia se votó la suspensión de la reforma jubilatoria aprobada en 2023, mientras que en Grecia aprobaron una reforma laboral.



AUSTERIDAD. La aprobación del presupuesto de Trump se extiende hasta enero de 2026.

En una votación que se llevó a cabo el pasado miércoles, el Parlamento francés resolvió la suspensión de la reforma previsional, con 255 votos a favor y 146 en contra.

La reforma de las pensiones fue impulsada por Sébastien

Lecornu, primer ministro francés, del actual gobierno. La misma modificó la edad de jubilación, elevó aportes y ajustó beneficios, lo que motivó la reacción de amplios sectores sindicales y sociales que se movilizaron al momento de su aprobación.

La suspensión actual, supone aplazar la reforma hasta las próximas elecciones, posponiendo hasta enero de 2028 la elevación de la edad de jubilación a los 64 años, y el aumento del número de trimestres de cotización necesarios para cobrar una pensión completa.

Marcha atrás

El Parlamento de Grecia, por su parte, aprobó desde hace dos meses una reforma laboral que entre otros puntos, permite ampliar la jornada de trabajo en el sector privado.

Con la reforma aprobada, Grecia permitirá que la jornada laboral se extienda hasta 13 horas diarias, siempre que exista

un acuerdo entre empleador y trabajador. Aunque, solo podrá aplicarse 37 días al año en situaciones excepcionales, con un tope semanal de 48 horas.

La Confederación General de Trabajadores Griegos (GSEE) sostiene que muchos empleados carecerán de la oportunidad real de negarse a hacer esas 13 horas, lo que fomentaría la “precariedad”.

Desde el momento de su aprobación, las calles griegas se llenaron de protestas, con movilizaciones continuas que incluyeron paralizaron el transporte y varios servicios públicos, paros de trabajadores, además de dos huelgas generales y continuos reclamos frente al Parlamento.

OPINIÓN

La captura estatal en la batalla fiscal de los multimillonarios

Una plutocracia compró los mecanismos del Estado para perpetuar una era de privilegios feudales.

Por: Alenadro Marcó del Pont

Cualquier debate que pretenda ser serio sobre la arquitectura del capitalismo en el siglo XXI debe, por necesidad ineludible, contener en su núcleo una discusión frontal sobre la fractura central de nuestra época: la que separa de manera profunda a los ricos de los pobres.

Esta no es una división natural o un mero resultado de diferencias de talento o esfuerzo; la concentración extrema de ingresos y riqueza que define nuestro tiempo no es un subproducto accidental del crecimiento económico, sino el resultado deliberado de decisiones políticas e institucionales tomadas durante décadas de ofensiva ideológica. Un proyecto de ingeniería social a la inversa, cuyas herramientas maestras han sido la desregulación financiera desbocada, una globalización asimétrica diseñada para el capital y no para el trabajo, y la construcción paciente de un sistema fiscal que, lejos de ser progresivo, opera como un mecanismo de redistribución inversa, succionando recursos del conjunto de la sociedad para depositarlos en los bolsillos de una minoría ya obscuramente acaudalada.

La imagen de los multimillonarios conspirando en una sala oscura es un simplismo que oculta una realidad mucho más insidiosa y poderosa. Ellos no necesitan manejar los Estados desde las sombras porque, simplemente, han logrado algo más profundo y duradero: ejercen una influencia sistémica, estructural, sobre las propias reglas del juego económico y político.

Su poder no reside en violar las normas, sino en escribirlas. Esta captura del Estado, un fenómeno documentado y no una mera teoría de la conspiración, permite a las corporaciones y a los magnates que las controlan financiar candidatos para influir directamente en la composición misma de los gobiernos, obteniendo a cambio un acceso privilegiado y constante a los



“The Protectors of Our Industries”, de Bernhard Gillam. Publicada en 1883.

procesos ejecutivos, legislativos, judicial y regulatorios.

Para comprender la magnitud de este fenómeno es imperativo comenzar por el principio, por el flujo de capital que lubrica toda la maquinaria. Los multimillonarios siguen inundando la democracia estadounidense, y por extensión la de muchos otros países, con un diluvio de dinero que convierte la igualdad política formal en una farsa. Un dato, frío y elocuente, basta para ilustrarlo: tan solo 100 familias en los Estados Unidos han invertido una cifra récord de 2.600 millones de dólares en las elecciones federales de 2024, lo que representa uno de cada seis dólares gastados en total.

Esta astronómica cifra duplica la cantidad donada por los multimillonarios estadounidenses en las elecciones presidenciales de 2020. Y representa un aumento de casi 160 veces en el gasto político desde que la infame ley Citizens United de la Corte Suprema de 2010 abrió las compuertas al permitir las donaciones ilimitadas a las campañas, equiparando el dinero con la libertad de expresión y transformando la política en un mercado de influencias.

(...)

La conquista del Estado no es, insistimos, una fantasía conspirativa; es un fenómeno estudiado y denominado «captura regulatoria», un proceso donde los medios de difusión, cada vez más concentrados, y las

redes sociales, controladas por estos mismos intereses, tienen el dominio casi absoluto de la narrativa pública. Los laboratorios de ideas (Think Tanks), generosamente financiados por estas élites producen un flujo constante de investigaciones pseudocientíficas que legitiman políticas favorables a los ricos —como rebajas de impuestos para las grandes corporaciones o la desregulación de sectores claves—, presentándolas ante la opinión pública como medidas «técnicamente necesarias» para el crecimiento económico, un mantra que esconde una transferencia masiva de recursos hacia arriba.

(...)

El botín para los aportantes se materializa en un catálogo de privilegios: la creación de leyes impositivas favorables, es decir, un código tributario deliberadamente complejo y plagado de exenciones, créditos y deducciones para los ingresos del capital, que tributan a tipos mucho menores que el trabajo asalariado; la imposición de leyes laborales favorables al capital, presionando contra el aumento del salario mínimo federal, debilitando los derechos de sindicalización y facilitando la clasificación fraudulenta de los trabajadores como «contratistas independientes» para eludir sus obligaciones; la omisión sistemática de regulaciones, desmantelando metódicamente

las normas ambientales, financieras o de seguridad que se consideran «barreras» para los negocios; el afianzamiento de monopolios y oligopolios mediante el debilitamiento estratégico de las agencias antimonopolio, asegurándose que las leyes de competencia no se apliquen con rigor.

(...)

En este contexto, gravar a los multimillonarios y detener su concentración de riqueza se ha convertido, en 2025, en una de las luchas políticas centrales a nivel global. Basado en discusiones recientes en medios, académicos y tanques de pensamiento, esta agenda gana una tracción sin precedentes como respuesta lógica a una concentración de riqueza que, en 2025, supera los \$16 billones (casi el PIB de China) en manos de unos 3.000 multimillonarios, mientras el 50 % más pobre de la población mundial posee solo el 2 % de la riqueza global.

(...)

Esta iniciativa se ve no solo como una herramienta esencial para reducir la desigualdad, sino como un mecanismo vital para financiar las enormes inversiones requeridas para las transiciones sociales del siglo XXI. Sin embargo, la principal preocupación, y el talón de Aquiles de cualquier esfuerzo de este tipo, radica en que, si el impuesto no es verdaderamente global y coordinado, los millonarios simplemente moverán su residencia fiscal y sus activos a países que no lo apliquen, lo que llevaría a la temida «fuga de millonarios», un chantaje fiscal al que los Estados han sido históricamente vulnerables.

(...)

En resumen, esta lucha no es solo sobre gravar, sino sobre reequilibrar el poder: detener la concentración que permite a multimillonarios «adueñarse» de los Estados vía el cabildeo. Si gana terreno, podría redefinir la política económica global en 2026.

Nota completa en: www.eltabanoeconomista.wordpress.com